

NOTAS DE POBLACIÓN

AÑO XXXII, N° 80, SANTIAGO DE CHILE



NACIONES UNIDAS

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población

LC/G.2276-P
Octubre de 2005

Copyright © Naciones Unidas 2005
Todos los derechos están reservados
Impreso en Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
NÚMERO DE VENTA: S.05.II.G.142
ISBN 92-1-322775-2 ISSN impreso 0303-1829 ISSN electrónico 1681-0333

Ilustración de portada: Frida Kahlo, mexicana.
"Mis abuelos, mis padres y yo" (detalle), 1936
Diseño de portada: María Eugenia Urzúa

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo

**CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFÍA
(CELADE) - DIVISIÓN DE POBLACIÓN**

Dirk Jaspers, Director

La Revista **NOTAS DE POBLACIÓN** es una publicación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población, cuyo propósito principal es la difusión de investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe, aun cuando recibe con particular interés artículos de especialistas de fuera de la región y, en algunos casos, contribuciones que se refieren a otras regiones del mundo. Se publica dos veces al año (junio y diciembre), con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía propiamente tal, como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos económicos, sociales y biológicos.

Comité editorial:

Jorge Bravo
Juan Chackiel
José Miguel Guzmán
Susana Schkolnik

Secretaria:

María Teresa Donoso

Redacción y administración:

Casilla 179-D, Santiago, Chile
E-mail: MaríaTeresa.Donosos@cepal.org

Precio del ejemplar: US\$ 12

Suscripción anual: US\$ 20

Las opiniones expresadas en esta revista son responsabilidad de los autores, sin que el CELADE sea necesariamente partícipe de ellas.

SUMARIO

Presentación	7
Esperanza de vida y dinámica de las sociedades. <i>Jacques Véron</i>	11
Cambios en la estructura por edades de la población, transferencias intergeneracionales y protección social en América Latina. <i>Andras Uthoff, Jorge Bravo,</i> <i>Cecilia Vera y Nora Ruedi</i>	27
Las transferencias intergeneracionales y la desigualdad socioeconómica en Brasil: un análisis inicial. <i>Cassio M. Turra</i> <i>y Bernardo L. Queiroz</i>	65
Las transferencias intergeneracionales en Uruguay. <i>Magdalena Furtado</i>	99
Los adultos mayores en América Latina y el Caribe: arreglos residenciales y transferencias informales. <i>Paulo M. Saad</i>	127
México y Estado de Guanajuato: transferencias intergeneracionales hacia los adultos mayores. <i>Verónica Montes de Oca y Mirna Hebrero</i>	155
El impacto de las transferencias intergeneracionales de la vivienda. <i>François-Charles Wolff y Claudine Attias-Donfut</i>	195

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACIÓN, TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES Y PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

Andras Uthoff, Jorge Bravo, Cecilia Vera y Nora Ruedi*

RESUMEN

Se examinan los efectos de dos importantes transformaciones que acompañan los procesos de desarrollo de las economías de América Latina: la transición demográfica, la que refleja los cambios de las tasas de fecundidad y de mortalidad y que afectan el tamaño y la estructura por edades de la población; y los cambios en el mercado del trabajo, los que reflejan el volumen y la asignación de recursos productivos entre sectores económicos y el grado de formalización del empleo. En este contexto, se analizan las diferentes configuraciones demográficas y económicas en los países de la región que facilitan o dificultan, según sea el caso, la cobertura y sostenibilidad financiera de los programas sociales. A ello se agrega el papel que juegan las transferencias “intergeneracionales” (las que ocurren entre distintos grupos de edad) en la sustentación del consumo de la población, así como sus efectos distributivos en el corto y mediano plazo.

El estudio demuestra las condiciones bajo las cuales un modelo de protección puede ser adecuado para una economía y no para otra, según su nivel desarrollo económico, la etapa de la transición demográfica y el grado de “formalidad” de su mercado de trabajo. Para ello, se usa un nuevo indicador de dependencia, que relaciona el número de personas inactivas y con problemas de empleo, con el número de trabajadores con empleo formal. Este se contrasta con el potencial de la economía de brindar servicios sociales a los individuos dependientes a través del gasto público social.

* Los autores agradecen la eficiente asistencia de investigación de Mauricio Holz.

Luego se examina la evidencia sobre los mecanismos que han implementado los países de la región para realizar las transferencias intergeneracionales requeridas. Se hace una revisión crítica de los estudios existentes, que permiten ilustrar la importancia que tienen esas transferencias, tanto las públicas como las privadas, así como sus efectos sobre la equidad distributiva entre generaciones y la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social.

ABSTRACT

This paper considers the effects of two significant changes present in the development process of the Latin American economies: the demographic transition, which reflects changes in fertility and mortality rates and affects the size and age structure of the population; and changes in the labour market, which reflect the volume of productive resources, their allocation among economic sectors and the degree of formality of employment. In this context, an analysis is made of the different demographic and economic structures in the countries of the region which either facilitate or hinder the coverage and financial sustainability of social programmes. There is also consideration of the role played by “intergenerational” transfers (those taking place between different age groups) in sustaining the consumption of the population, as well as their distributive effects in the short and medium term.

The study shows the conditions under which a protection system may be suitable for one economy and not for another, depending on its level of economic development, the stage of demographic transition and the degree of formality of the labour market. A new dependence indicator is used, which compares the number of persons not working or experiencing employment problems with the number of workers employed in the formal sector. This indicator is contrasted with the potential of the economy to provide social services to dependent individuals through social public spending. The various mechanisms used in the countries of the region to carry out the necessary intergenerational transfers. A critical review of the existing studies is undertaken, which demonstrates the importance of these transfers, both public and private, and their effects on distributive equity between generations and the financial sustainability of social protection systems.

RÉSUMÉ

Cette étude aborde les effets de deux transformations majeures qui vont de pair avec les processus de développement des économies en Amérique latine: la transition démographique, caractérisée par les changements des taux de fécondité et de mortalité ayant des répercussions sur la taille et la structure par âge de la population; et les changements intervenus sur le marché du travail, mesurés en termes de volume et de distribution des ressources de production entre secteurs économiques et le degré de formalisation de l'emploi. À partir de ces prémisses, les auteurs analysent les différentes configurations démographiques et économiques en vigueur dans les pays de la région qui favorisent ou entravent, selon le cas, la couverture et la soutenabilité financière des programmes sociaux. Il examine aussi le rôle que jouent les transferts "intergénérationnels" (s'effectuant entre différents groupes d'âge) dans le soutien de la consommation de la population, ainsi que leurs effets sur la répartition à court et moyen terme.

L'étude expose les conditions qui font qu'un modèle de protection est approprié à une économie et non à une autre, selon le niveau de développement économique, l'étape de la transition démographique et le degré de "formalité" du marché du travail. Pour ce faire, un nouvel indicateur de dépendance est utilisé qui met en relation le nombre de personnes inactives et celles connaissant des problèmes d'emploi avec le nombre de travailleurs dotés d'un emploi formel. Le résultat obtenu est mis en regard avec le potentiel de l'économie à fournir des services aux individus dépendants par le biais des dépenses publiques sociales. L'étude aborde ensuite examine les mécanismes mis en œuvre par les pays de la région permettant d'effectuer les transferts intergénérationnels nécessaires. Une révision critique des études existantes montre l'importance que revêtent ces transferts, tant publics que privés, ainsi que leurs effets sur l'équité en termes de répartition entre générations et la soutenabilité financière des systèmes de protection sociale.

INTRODUCCIÓN

Dos transformaciones acompañan a los procesos de desarrollo de las economías de América Latina: *i*) la transición demográfica de una sociedad, que refleja los cambios de las tasas de fecundidad y de mortalidad y que afecta la trayectoria del tamaño y de la estructura por edades de la población (CEPAL/CELADE, 2004) y, *ii*) los cambios en sus mercados de trabajo, que reflejan el volumen y la asignación de recursos productivos entre sectores económicos, afectan la migración y la urbanización de la fuerza de trabajo y el grado de formalización del empleo (CEPAL, 2004).

Pese a la relevancia de estos dos procesos para el diseño y funcionamiento de los sistemas de protección social, la región ha seguido una tendencia a imitar modelos basados en esquemas contributivos sobre la planilla salarial; pese a los avances que han significado respecto de épocas donde no existían instituciones de protección social, éstos han resultado a la postre, insuficientes para abarcar la heterogeneidad de las situaciones de riesgo y de la capacidad contributiva de la población económicamente activa.

En este contexto, cabe preguntarse sobre las diversas configuraciones demográficas y económicas en los países de la región, que facilitan o dificultan la cobertura y la sostenibilidad financiera de los programas sociales. También es relevante, en esta perspectiva, examinar el papel que juegan las transferencias, especialmente las que ocurren entre distintos grupos de edad (llamadas transferencias “intergeneracionales”) para sustentar los diferentes grupos de la población, así como sus efectos distributivos en el corto y mediano plazo.

El presente documento se propone, en su primera parte, efectuar un análisis sencillo de la forma en que los procesos mencionados afectan el diseño de los modelos de protección social; se demuestran las condiciones necesarias para que un modelo de protección sea adecuado para una determinada economía según su nivel de desarrollo económico, la etapa de la transición demográfica que atraviesa y el grado de “formalidad” de su mercado de trabajo.

Para tal efecto, primero es necesario obtener, en el caso de los países de América Latina, un indicador de dependencia que relacione el número de individuos “dependientes” de la economía con el número de personas que tienen un empleo formal. Se trata de una variante del comúnmente utilizado indicador de dependencia demográfica, que relaciona el número de individuos en edades inactivas de la población con los que se encuentran en

edades activas, como forma de medir el esfuerzo que la población potencialmente activa debería hacer para cubrir las necesidades de la población inactiva y más vulnerable. Luego se estima la relación (negativa) entre el indicador de dependencia construido y el producto per cápita de las economías de América Latina y el Caribe, ubicando a los países sobre esa curva, y caracterizándolos según estas dos dimensiones.

Posteriormente, se deriva una curva que refleja el potencial de una economía para proporcionar servicios sociales a los individuos dependientes mediante el gasto social público; se trata de una suerte de “curva de oferta” de servicios sociales públicos, que es creciente respecto del producto per cápita de la economía. Se compara esta curva con el índice de dependencia según el nivel de desarrollo, también medido por el ingreso per cápita, y se derivan algunas implicancias para determinados sectores, programas y grupos etarios.

En la segunda parte del documento se examinan las evidencias en los países de la región sobre algunos mecanismos para realizar las transferencias requeridas, con especial énfasis en aquellas de carácter intergeneracional; se hace una revisión de los estudios existentes, que permiten ilustrar la importancia que esas transferencias —tanto las públicas como las privadas— tienen en diversos países y sus efectos sobre la equidad distributiva y la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social.

I. DINÁMICA DEMOGRÁFICA, MERCADO DEL TRABAJO Y BRECHAS DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO SOCIAL

A. El indicador de dependencia

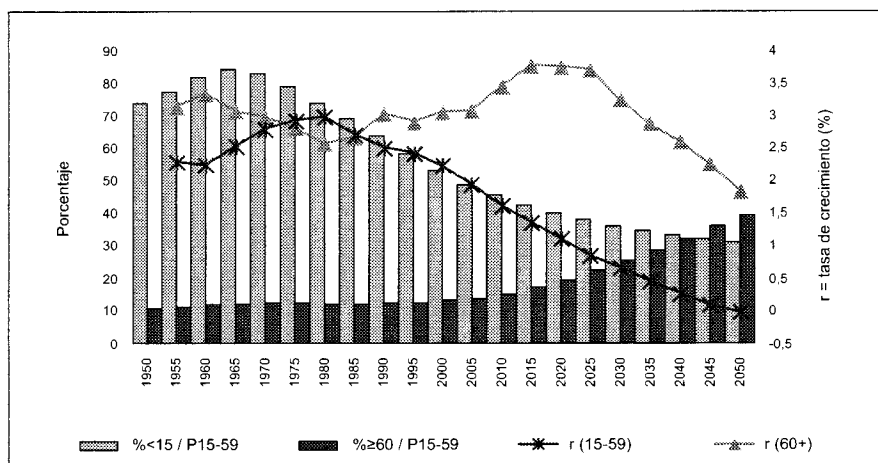
Debe recordarse que la transición demográfica describe un proceso de larga duración que transcurre entre dos situaciones extremas: una inicial, con altas tasas de mortalidad y fecundidad y, por ende, bajo crecimiento demográfico y otra final, con bajas tasas de mortalidad y fecundidad y también con bajo crecimiento demográfico. Entre ambas situaciones se identifican dos momentos de cambio: en el primero, la tasa de crecimiento de la población aumenta como consecuencia de una baja en la mortalidad, y en el segundo dicha tasa disminuye, debido a la caída en la fecundidad (CEPAL/CELADE/BID, 1996).

América Latina se encuentra transitando por la fase de disminución de la fecundidad, con un fuerte descenso de dicha tasa a partir de mediados de los años sesenta, luego de haber experimentado un descenso de su tasa de mortalidad desde la primera mitad del siglo XX.

Luego de iniciada la reducción de la fecundidad, la población experimentó una baja en el ritmo de crecimiento de la población joven (menores de 15 años) y total, así como una disminución del número de jóvenes por cada persona en edad de trabajar (entre 15 y 59 años).

En la actualidad, se verifica una importante caída del ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar, y un relativo aumento de la población mayor de quince años (gráfico 1). Continúa el descenso del número de jóvenes por persona en edad de trabajar y se incrementa —en forma lenta primero y acelerada posteriormente— el número de adultos mayores de 60 años por cada persona en edad de trabajar.²

Gráfico 1
AMÉRICA LATINA: DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
(Tasas de crecimiento de diferentes grupos de edades y porcentaje de menores de 15 y mayores de 60 años sobre la población de 15 a 59 años)



Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales de la CEPAL/CELADE.

Nota: r = tasa de crecimiento.

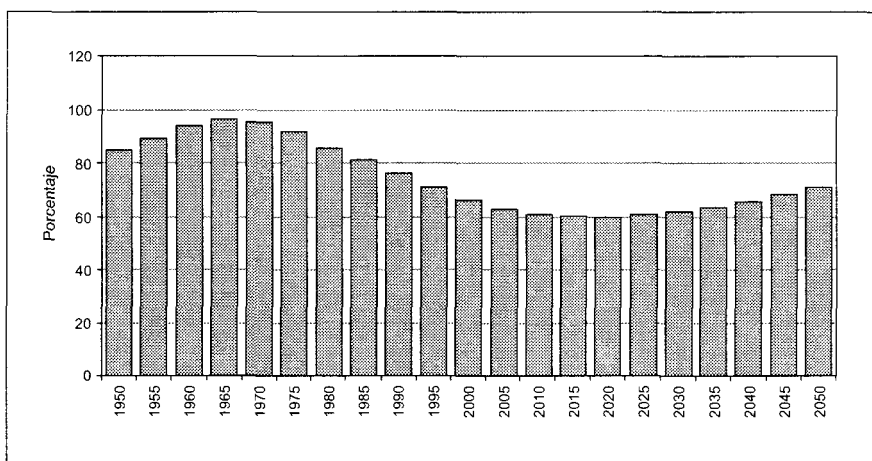
P = Población

² En la actualidad, en los países desarrollados y en algunos en desarrollo se habla incluso de una segunda transición demográfica, en que la fecundidad ha continuado su descenso hasta niveles por debajo de los de reemplazo. Esto ha conducido en algunos casos a tasas de crecimiento poblacional negativas y a un envejecimiento más pronunciado de la población. En el caso de América Latina y el Caribe, esto ya estaría empezando a ocurrir en Cuba y otros países del Caribe (véase Alfonso, 2004 y CELADE, Boletín Demográfico 74).

Un indicador tradicional de dependencia demográfica es el que relaciona el número de individuos en edades inactivas (menores de 15 años y mayores de 60 años) con el de las principales edades activas (de 15 a 59 años); es una forma de medir el esfuerzo que la población potencialmente activa debe hacer para cubrir las necesidades de la población inactiva y más vulnerable.

Dada la dinámica de la transición demográfica —y en ausencia de importantes flujos de migración fuera de la región— el indicador tomaría la forma de una “U” a lo largo del tiempo a partir del descenso rápido de la fecundidad; la fase descendente de la dependencia estaría conformada por jóvenes y la ascendente por adultos mayores.

Gráfico 2
INDICADOR TRADICIONAL DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA
($P < 15 + P \geq 60$) / (P_{15-59})



Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales de CEPAL/CELADE.
Nota: P = Población.

El indicador tradicional presentado en el gráfico 2 tiene dos limitaciones importantes. En primer lugar, considera a cada persona con un peso similar respecto a su dependencia de la población en edad de trabajar; sin embargo, el costo de financiar las necesidades de consumo, que pueden verse amenazadas por los riesgos sociales, puede diferir significativamente

entre personas de distintas edades. Para subsanarlo, es necesario usar escalas “equivalentes”, al igual que en el caso de las mediciones de pobreza, lo que implica una alta discrecionalidad, en la medida en que se ponderan los riesgos sociales en cada grupo de edad.

Por otra parte, la medición asume que cada persona de 15 a 60 años contribuye al presupuesto familiar en igualdad de condiciones; en realidad, entre estas personas hay algunas inactivas, y dentro de las activas existen ocupadas y desocupadas. A su vez, dentro de las ocupadas hay personas en ocupaciones formales-modernas y otras en informales-tradicionales. La población en edad de trabajar representa sólo un potencial de generación de ingresos para la subsistencia de sus familias, y el indicador de dependencia tradicional —en términos exclusivamente demográficos— oculta los serios problemas de vulnerabilidad laboral de las economías de la región.

Al respecto, cabe recordar que, durante el período 1950-1980, el mercado de trabajo experimentó importantes ajustes en respuesta a un mayor crecimiento de las ocupaciones no agrícolas. Las estimaciones de la OIT indican que la ocupación no agrícola aumentó su participación en el empleo total, de 42% a 63%. Mientras tanto, la subutilización total —medida como el porcentaje subempleo y desempleo— disminuyó de 46% a 40% entre 1950 y 1980 (OIT, 1991).

A partir de 1980, y a raíz de las consecuencias de la crisis de la deuda, la subutilización total aumenta y comienza a sentirse la menor presión demográfica, el empleo continúa siendo absorbido por las actividades no agrícolas (en su gran mayoría informales), el desempleo abierto permanece estable y el empleo en el sector campesino decrece relativamente poco. Durante este período, la subutilización de la fuerza de trabajo (desempleo más subempleo) aumenta de 40% a 42%, con lo que se quiebra la tendencia histórica decreciente registrada en las tres décadas anteriores.

Para considerar adecuadamente las realidades descritas, se construyó un indicador de dependencia que procura captar, además de la tradicional dimensión demográfica de la dependencia, los problemas estructurales o cíclicos de los mercados laborales.

En el numerador del nuevo indicador se consideró el número total de individuos dependientes (D) de una población, donde ahora D = menores de 15 años + inactivos (15 a 59 años) + adultos mayores de 60 años + personas con problemas de empleo.

Dentro de los adultos mayores de 60 años se incluyó a los inactivos y activos y dentro de las personas con problemas de empleo se incluyó a los desempleados y a los trabajadores informales de 15 a 59 años de edad.

En el denominador (F) del nuevo indicador se incluyó únicamente a las personas de entre 15 y 59 años ocupadas en el sector formal-moderno

de la economía,³ que hacen el grueso de las contribuciones de los recursos —públicos y privados— para financiar la protección social.⁴

El cálculo de este nuevo indicador (*D/F*) para 16 países de América Latina y el Caribe permite observar tres características: en primer lugar, al incluirse un nuevo grupo de dependientes por problemas asociados al mercado de trabajo —ya sea por desempleo o por subempleo— el nuevo indicador de dependencia es bastante mayor que el puramente demográfico (calculado de la forma tradicional). Como se observa en el cuadro 1,⁵ en 1950 la diferencia era de 1 a 10, en 1980 era 1 a 6 y en 1989, 1 a 7. En segundo lugar, el descenso de la dependencia es más acentuado en el tiempo y, por último, se reduce el peso de la dependencia estrictamente demográfica (jóvenes menores de 15 años y adultos mayores de 60) al incluir como dependientes a los que tienen problemas de empleo y a los inactivos (cuadro 1).

Cuadro 1

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA Y DEL EMPLEO FORMAL-MODERNO

América Latina	1950		1980		1989	
	Dependencia demográfica	Dependencia formal	Dependencia demográfica	Dependencia formal	Dependencia demográfica	Dependencia formal
< 15	0.710	3.64	0.709	2.41	0.615	2.08
> 65	0.065	0.34	0.079	0.27	0.080	0.27
Inactivos		3.29		1.73		1.66
Desempleados		0.07		0.07		0.08
Subempleados		0.77		0.57		0.64
Total	0.775	8.11	0.788	5.05	0.695	4.73

Fuente: Elaboración propia basada en OIT/PREALC (1991).

³ El sector formal se refiere a las personas ocupadas —en el sector público y en el sector privado— en empresas pequeñas, medianas y grandes, es decir, de más de 6 trabajadores y se asocia al sector moderno de la economía, especialmente cuando se trata del sector agrícola. Por el contrario, el sector informal se refiere a ocupaciones de baja productividad e incluye a trabajadores por cuenta propia no profesionales (no comprende a administrativos, profesionales ni técnicos), trabajadores familiares, servicio doméstico y trabajadores en empresas de menos de 5 personas.

⁴ Esta metodología de construcción magnifica el indicador de dependencia, pues existen menores de 15 años y mayores de 60 años que pueden ser personas activas en el sector formal, y también puede haber trabajadores informales que no sean dependientes.

⁵ La información histórica en el cuadro 1 se elaboró a partir de estimaciones contenidas en OIT/PREALC (1991). Los cortes de edad difieren de las del resto de este documento.

Si se desagrega este nuevo indicador de dependencia en sus diversos componentes, es posible ponderar los factores específicos de riesgo social asociados a los distintos grupos de edades y problemas (cuadro 2).⁶ Así, por ejemplo, y en el caso de todos los países, el componente que explica en mayor medida el indicador total es el asociado a los menores. De hecho, en Guatemala, Honduras y Nicaragua la dependencia de menores explica casi la mitad del indicador total. La importancia de la población menor de edad y la forma en que es afectada por las transferencias requeridas para su mantención es un tema que se considerará con más detalle en la segunda parte del documento.

El segundo componente es el asociado a los problemas de empleo, excepto para los casos de Chile y Costa Rica, donde la mayor dependencia se vincula a los inactivos entre 15 y 59 años.

Cuadro 2
INDICADOR DE DEPENDENCIA FORMAL TOTAL Y POR COMPONENTES
(Año 2002)

	Total	Menores	Inactivos (15-59)	Adultos > 60 años	Problemas de empleo
Bolivia	9,6	4,2	1,5	0,7	3,2
Honduras	9,4	4,4	2,0	0,7	2,3
Paraguay	8,9	3,8	1,5	0,8	2,9
Perú	7,7	3,0	1,4	0,8	2,5
Guatemala	7,5	3,6	1,3	0,5	2,1
Nicaragua	7,5	3,4	1,5	0,5	2,1
República Dominicana	6,4	2,6	1,5	0,7	1,6
El Salvador	5,5	2,1	1,2	0,6	1,6
República Bolivariana de Venezuela	5,0	2,0	1,0	0,4	1,6
México	4,9	1,9	1,3	0,5	1,3
Panamá	4,7	1,8	1,1	0,5	1,3
Uruguay	4,2	1,3	0,7	1,0	1,2
Argentina	4,0	1,2	0,9	0,7	1,1
Costa Rica	3,9	1,5	1,1	0,4	1,0
Brasil	3,8	1,4	0,8	0,4	1,1
Chile	3,2	1,1	1,0	0,5	0,7

Fuente: Elaboración propia basada en datos oficiales de CEPAL.

Nota: Los cálculos se realizaron con población total nacional, excepto en los casos de Argentina y Uruguay donde, por disponibilidad de información, los datos corresponden a población urbana.

⁶ Sin embargo, estos componentes ponderan con igual peso el número de personas, independientemente del tipo de riesgos a los cuales estén expuestos y del costo de prevenirlos o mitigarlos.

El componente menos relevante, para todos los países, es el relacionado con los adultos mayores de 60 años, excepto para Uruguay, donde ese elemento explica la cuarta parte del índice total, casi con el mismo peso que los problemas de empleo.

Si bien lo anterior es cierto, el indicador captura efectos estructurales de las economías, pero también efectos cíclicos (como las variaciones del desempleo o del subempleo); a su vez, este hecho puede tornarlo variable (dependiendo del momento en que se mida).

Al comparar los indicadores de dependencia de 1997 —total y por componentes— con los de 2002, se comprueba que en 2002 el índice de dependencia total es mayor que en 1997 en los casos de Honduras, Perú, El Salvador, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Venezuela y Panamá. Los países donde el indicador se deterioró más entre esos años fueron Uruguay y Argentina, seguidos por Honduras y Perú. Nuevamente, debe resaltarse que algunos elementos cíclicos pueden estar detrás del deterioro de algún componente del indicador total.

B. Dependencia y brechas de protección social según el nivel de desarrollo

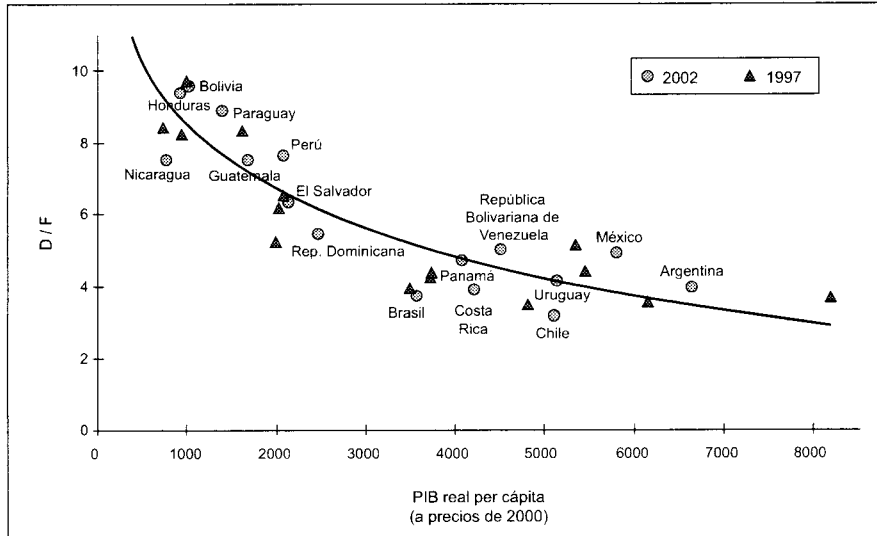
En esta sección se analiza brevemente la relación entre el indicador de dependencia y el PIB per cápita de los países, y las brechas entre “demanda” y “oferta” agregada de recursos para la protección social.

Relación entre el indicador de dependencia formal y el PIB per cápita

En el gráfico 3 se muestra la relación estimada entre el PIB real per cápita y el indicador (D/F) para los años 1997 y 2002 para 16 países de la región.⁷

⁷ Se estimó una regresión de panel con datos a nivel nacional para los años 1997 y 2002, la cual arrojó un coeficiente negativo para la relación entre el indicador de dependencia y el PIB per cápita de -2,65.

Gráfico 3
INDICADOR DE DEPENDENCIA FORMAL TOTAL Y PIB PER CÁPITA
 (1997 y 2002)



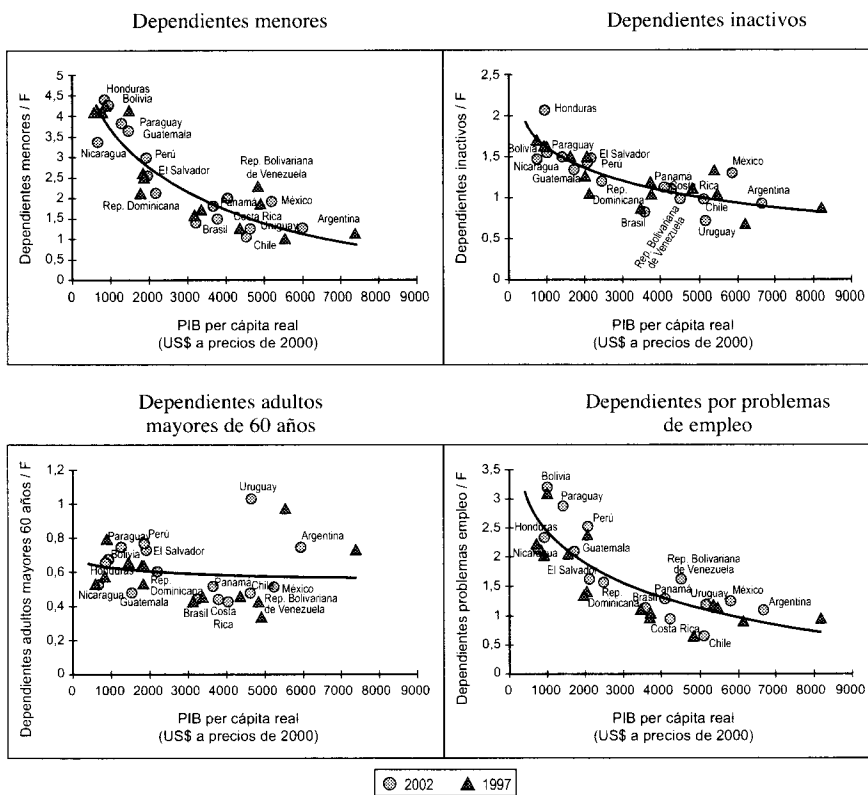
Fuente: Elaboración propia.

Los países con altos índices de dependencia y bajo nivel de ingreso per cápita tienen un elevado nivel de “demanda” por protección social, que debe ser satisfecha mediante transferencias públicas o privadas pues, si los montos son insuficientes, es probable que resulten indicadores sociales desfavorables; los países más ricos enfrentan requerimientos menores. Al estimar la misma relación, pero abriendo el indicador de dependencia entre sus cuatro componentes (menores, inactivos de 15 a 59 años, adultos mayores de 60 años e individuos con problemas de empleo —desempleados e informales—), se obtienen relaciones de pendiente negativa en todos los casos, aunque en el de los mayores de 60 años la relación es más débil.

Gráfico 4

INDICADORES DE DEPENDENCIA SEGÚN COMPONENTES Y PIB PER CÁPITA

(1997 y 2002)

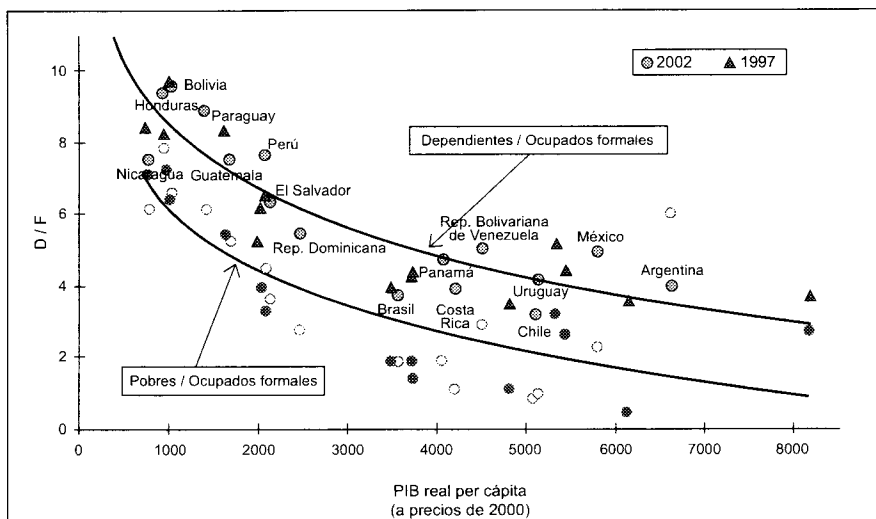


Fuente: Elaboración propia.

Las curvas anteriores vienen a representar las necesidades (o demandas) de protección social de las economías de Latinoamérica, de acuerdo con el número de dependientes de los que hacerse cargo.

Al diseñar una curva alternativa de necesidades de protección social, que vincula el número de pobres sobre ocupados formales al PIB per cápita (como forma de restringir al extremo a los demandantes de protección social) se confirma que el mayor valor de este indicador se asocia también con la mayor incidencia de la pobreza; sin embargo, en este caso se estaría asumiendo que sólo los individuos en situación de pobreza serían demandantes de protección social.

Gráfico 5
CURVA ALTERNATIVA DE NECESIDADES DE PROTECCIÓN SOCIAL
 (1997 y 2002)



Fuente: Elaboración propia.

“Curva de oferta” potencial de servicios sociales del sector público

Es posible derivar una “curva de oferta” potencial de servicios sociales dados por el sector público, que vincula el PIB per cápita de los países con la cantidad de personas dependientes (con relación al número de ocupados formales) que podría proteger.

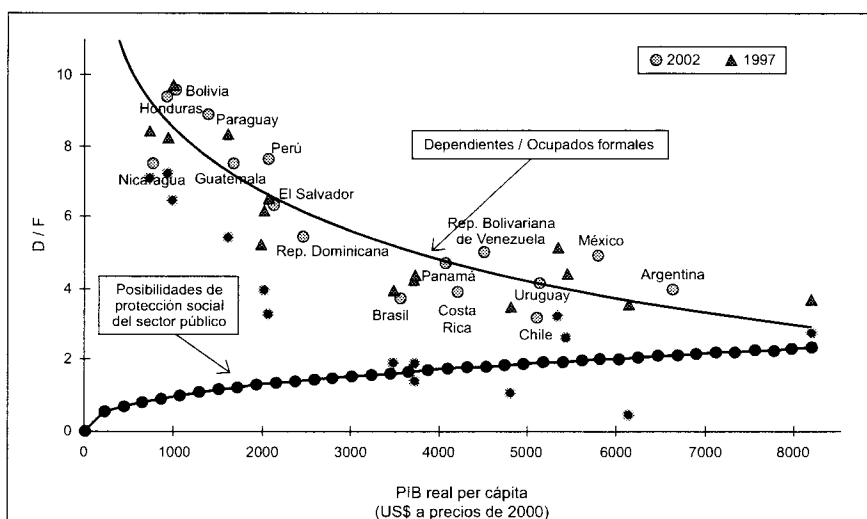
Para ello, se supone que el Estado otorga a cada individuo dependiente un monto determinado de beneficios (que se supone igual para todas las categorías de dependientes) y que, para ello, asigna un monto total de recursos igual al promedio del monto destinado al gasto social en América Latina.⁸ La derivación teórica y la calibración empírica de dicha curva se encuentran en Uthoff, Vera y Ruedi (2006).

Agregando la curva de oferta al gráfico 5 se obtiene el gráfico 6.

⁸ Se consideró el promedio del gasto social de América Latina (16 países).

Gráfico 6

“NECESIDADES” Y “POSIBILIDADES” DE PROTECCIÓN SOCIAL



Fuente: Elaboración propia.

Entre las necesidades totales de protección social que presenta una economía (dado su indicador de dependencia y su PIB per cápita) y las posibilidades de su sector público para proveerlas mediante el gasto público, surge una brecha que se reduce con el nivel de desarrollo medido por el PIB per cápita. En los países con mayor número de dependientes (y menor PIB per cápita), el Estado no tiene la capacidad de cubrir sus necesidades y, por lo tanto los indicadores sociales se deteriorarán si tampoco son cubiertas por otras vías.

El trabajo de Uthoff, Vera y Ruedi (2005) contiene una tipología de los países de Latinoamérica según su comportamiento en diversos indicadores de la situación social, identificando las áreas más débiles. Se observa que los países con mayores brechas son los que tienen mayores déficit en materias propias de la protección social: deficiencias en el cuidado de los niños, problemas de embarazo adolescente, incompatibilidad entre los roles del cuidado del hogar y los del mercado de trabajo, deserción escolar, bajos niveles de cobertura en la formación de capital humano, mayores niveles de morbilidad y mortalidad y pobreza en la vejez.

Para superar estas demandas asociadas a la dinámica demográfica del mercado de trabajo y de las finanzas públicas, es necesario diseñar políticas públicas que viabilicen las transferencias entre diversos grupos socioeconómicos y de edades.

II. TRANSFERENCIAS INTERGENERACIONALES EN AMÉRICA LATINA: MAGNITUDES Y SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA Y DE POLÍTICA

En esta parte se revisan las evidencias sobre las transferencias intergeneracionales en América Latina, su importancia económica y social en diferentes contextos nacionales y su efecto sobre la equidad distributiva y la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo de los sistemas de protección social. Se entienden las transferencias intergeneracionales de la forma en que las conceptualizan Lee (2003) y Mason, Lee y otros (2005), es decir, como aquellas reasignaciones de recursos económicos, realizadas en forma privada o a través del sector público, desde personas de un determinado grupo etario hacia personas de otras edades. Estas transferencias se efectúan sin una condición o contrapartida económica, y se las distingue de otras reasignaciones intertemporales o intergeneracionales —como las inversiones en activos físicos y las operaciones de crédito— que constituyen trasposos de capital o cambios en el stock de capital de la economía, y que, en todo caso, son gobernados por obligaciones explícitas o contractuales de recepción y devolución de préstamos.⁹

Las transferencias intergeneracionales ayudan a estabilizar el consumo a lo largo del ciclo de vida y, en particular, a cubrir los déficit de ingreso para financiar el consumo durante las edades “dependientes” de la niñez, de parte o toda la adolescencia y de la vejez. En América Latina, las transferencias son de especial relevancia porque son claves para proveer de protección social a la significativa proporción de la población que vive bajo condiciones de pobreza o que —en contextos estructurales de alta desigualdad socioeconómica— está sujeta a los riesgos y efectos de las fluctuaciones económicas.

Pero, pese a su importancia, existe un conocimiento más bien limitado de las transferencias intergeneracionales en la región. Un problema práctico ha sido la escasez de fuentes de información para un examen del ingreso, el consumo y las transferencias públicas y privadas desagregado por edad, especialmente aquellas que permiten prolongar ese examen multigeneracional con series temporales de cierta extensión.

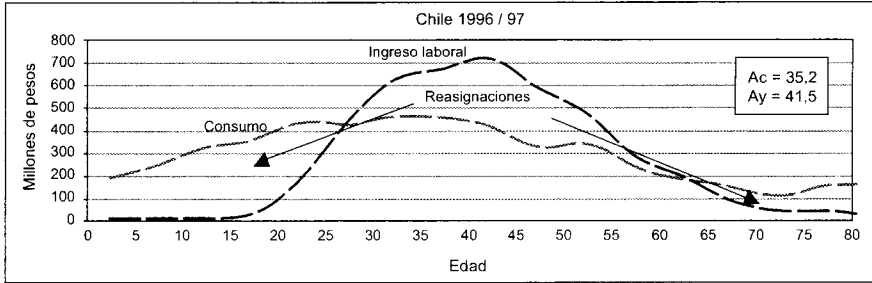
⁹ Existen también otros criterios de clasificación de las transferencias, como el que distingue el medio por el que se canalizan, es decir, las reasignaciones o transferencias familiares, las de mercado y las públicas, o el que considera la dirección etaria, denominando “ascendentes” a las transferencias que se efectúan desde edades más jóvenes hacia edades mayores y “descendentes” a las que ocurren en la dirección contraria.

Esta situación también puede atribuirse, en parte, a que los países de la región debieron encarar una serie de problemas macroeconómicos de corto plazo —que en algunos países y períodos han sido realmente agudos—, como recesión económica, desempleo, ajuste externo, entre otros, relegando muchas veces los temas redistributivos, u otros de horizonte de mediano o largo plazo, a un segundo plano en las discusiones de la política pública. Esta no es en realidad una buena justificación, ya que el análisis intergeneracional e intertemporal de las reasignaciones puede ser muy útil, para detectar por anticipado los desequilibrios implícitos en la combinación de las tendencias demográficas y la continuación de los programas y políticas actuales. Se puede así contribuir a identificar opciones de política que ayuden a evitar las crisis futuras. Además, la capacidad de las transferencias familiares o entre hogares para compensar los cambios en el gasto público para la protección social, es un asunto clave en la determinación de los efectos finales de los ciclos económicos y las políticas de gobierno sobre el bienestar de la población.

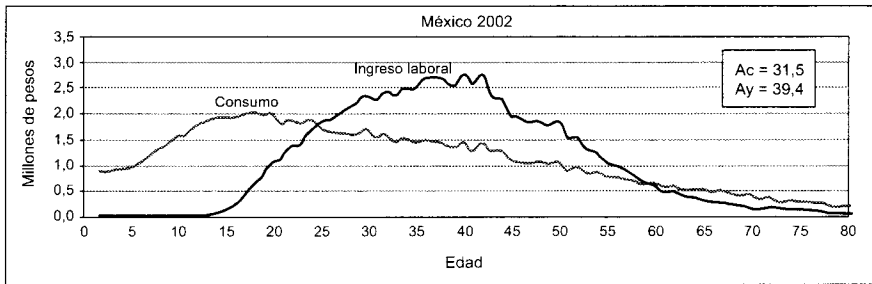
Finalmente, y tanto o más importante que lo anterior, es probable que la relativa escasez de información y análisis sobre transferencias intergeneracionales se deba a que, hasta hace pocos años, la perspectiva etaria o intergeneracional del bienestar económico, de la carga tributaria o del gasto público, no contaba con una base teórica muy sólida, y su incorporación a la contabilidad y el análisis económico general era fragmentaria y poco comparable entre países. Actualmente, se cuenta con marcos teóricos bastante elaborados y consistentes para la medición y análisis de las transferencias y otras reasignaciones (véase especialmente Mason y otros, 2005). En el sector público, los instrumentos y análisis de contabilidad generacional (Auerbach, Kotlikoff y Leibfritz, 1999) están siendo usados en forma más continua y sistemática por los gobiernos en distintas regiones del mundo.

Antes de discutir los distintos tipos de transferencias, cabe examinar brevemente el gráfico 7, que ilustra la magnitud general, la forma y la dirección neta de las reasignaciones etarias de recursos en Chile, México y El Salvador. En todos los casos, se aprecia claramente que —en concordancia con el análisis desarrollado en la primera parte de este documento— los superávits del ingreso sobre el consumo producidos por los trabajadores en las edades productivas centrales sirven para financiar los déficits en las edades dependientes.

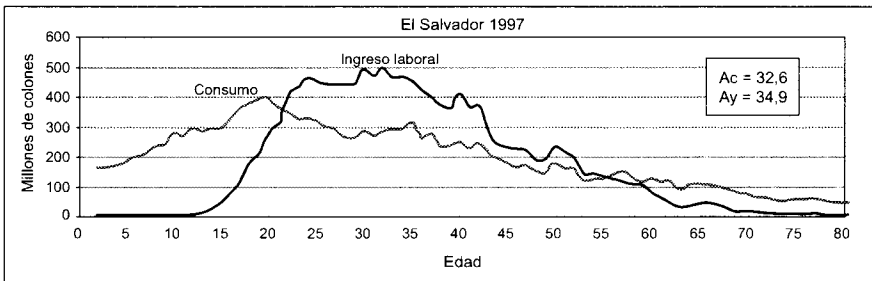
Gráfico 7
PERFILES ETARIOS DE INGRESO Y CONSUMO



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 1996 / 97.



Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2002.



Fuente: Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 1997.

Nota: Ac = Edad promedio del consumo
 Ay = Edad promedio del ingreso laboral.

Igualmente evidente es el papel de estas reasignaciones en la suavización (hacer más uniforme) del consumo de las personas de diferentes edades. Estimaciones preliminares de la magnitud agregada de las *transferencias* intergeneracionales¹⁰ en estos países sugieren que éstas representan entre un 36% y un 42% del total del ingreso laboral y entre un 30% y un 39% del consumo agregado, es decir, juegan un papel muy significativo en el sostenimiento de la población en su conjunto.

Se observan algunas diferencias significativas entre países: Chile presenta una elevada edad promedio al consumo, en comparación con México y El Salvador, lo que se debe fundamentalmente a su estructura etaria más envejecida. La baja edad promedio del ingreso de El Salvador respecto de México —y más aun de Chile— se explica tanto por el diferente grado de envejecimiento como por los ingresos laborales per cápita en las edades mayores relativamente más altos en Chile que en México y El Salvador. Más allá de las diferencias, los tres países muestran una clara dirección neta “descendente” de las reasignaciones, evidenciada por una edad promedio de los ingresos mayor que la edad media del consumo; esta situación es frecuente en países menos industrializados (Lee, 2003).

¿Qué parte de las transferencias son privadas, qué tanto de ellas se canaliza a través del Estado, y qué efectos económicos tienen? En las siguientes secciones se revisan las evidencias disponibles para países de América Latina.

A. Gasto y transferencias públicas

Existe un reconocimiento creciente —entre los analistas y tomadores de decisiones de las políticas fiscales— sobre la necesidad de considerar la dimensión etaria/intergeneracional como complemento a los análisis tradicionales de la incidencia distributiva y de la evaluación presupuestaria basada en indicadores agregados de déficit y deuda pública. Se reconoce, en particular, que estas últimas medidas son cada vez menos apropiadas para analizar la sustentabilidad de las políticas corrientes, en contextos de transformaciones demográficas importantes y de concentración del gasto público en programas focalizados en ciertos grupos de edad (Gokhale y Smetters, 2004). Algunos países de la región comienzan a utilizar información sobre el gasto público según un corte etario, como una forma de

¹⁰ Elaboradas por los autores a partir de los perfiles de consumo e ingreso provenientes de las encuestas de presupuesto/gasto familiar de cada país, y suponiendo que el déficit de consumo de los dependientes menores de edad se financia enteramente con transferencias.

complementar el examen funcional, sectorial y también el análisis de incidencia distributiva según estratos de ingreso. Esto es algo que la mayoría de los países industrializados —que tienen altos grados de envejecimiento demográfico— viene haciendo desde hace más de una década, preocupados por los efectos de los cambios en la composición etaria de la población sobre los gastos del gobierno en pensiones, salud, cuidados de largo plazo y educación. Esos análisis permiten evaluar diferentes estrategias de financiamiento intertemporal (véase, a modo de ejemplos recientes, Seller y Hauner, 2005; Comley y McKissack, 2005, Gokhale, 2005).

En algunos países de América Latina se ha analizado la incidencia distributiva de los impuestos y gastos públicos según grandes rubros, varios de los cuales tienen una correlación etaria, como los gastos en educación, seguridad social y algunos programas de salud. Un caso es el de Chile (Arenas, 2005; Arenas y Guzmán, 2001), donde se evaluaron los efectos distributivos del gasto social y del carácter anticíclico de la regla del superávit fiscal. Las evidencias sugieren que, durante la última década, la política fiscal —y especialmente el gasto social— tuvo un efecto distributivo importante, contribuyó a reducir la pobreza y a compensar en parte los efectos del ciclo económico. Todo ello se ha logrado en un marco de sustentabilidad financiera de mediano plazo del presupuesto fiscal y de los programas sociales en particular.

Paes de Barro y Carvalho (2003) muestran que el gasto social en Brasil no fue una herramienta muy eficaz para mejorar la distribución del ingreso y los índices de pobreza entre 1981 y 2001.¹¹ La más importante de las causas de la escasa efectividad del gasto público social es, según los autores, la mala focalización de los programas. Por ejemplo, en dos de ellos —uno dirigido a los niños pobres de 0 a 6 años (salas-cuna) y otro para niños y adolescentes de entre 6 y 15 años de edad de familias pobres (“Bolsa Escola”)— la distribución de los recursos entre los Estados no muestra relación, en muchos casos, con la distribución de la población objetivo de los programas entre ellos.

Estos autores alertan también sobre la diferencia que existe en la distribución generacional de los recursos destinados al gasto público social, desde una perspectiva de la superación de la pobreza. La mala focalización etaria se evidencia al comparar el efecto de los programas de transferencia “compensatorios”, que favorecen en muchísimo mayor medida a los adultos

¹¹ Si bien el porcentaje de extrema pobreza en Brasil ha disminuido en unos 10.5 puntos —uno de los mejores desempeños de Latinoamérica—, un 90% de esta mejora se debe a un mayor crecimiento económico, y sólo un 10% a una mejor distribución del ingreso.

mayores que a los niños (Paes de Barros y Carvalho, 2003), lo que conduce a que —luego de las transferencias— la incidencia de la pobreza entre los niños termina siendo más del triple que la de los adultos mayores.

Otro ejemplo es el de México en el año 2004, donde se analizó la distribución según ingresos de los impuestos y de los gastos públicos en 2002.¹² El caso es interesante, puesto que México fue uno de los pocos países de América Latina que bajó los índices de pobreza, indigencia y desigualdad entre 1999 y 2002. Por una parte, el estudio estima que las transferencias (gubernamentales y de otros hogares) ayudan a reducir la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini) en un 3% para el ingreso total y en un 1% para el ingreso per cápita. También se presenta un análisis de la incidencia del gasto público en educación, pensiones, subsidio eléctrico y transferencias de los programas Progresá/Oportunidades y Procampo; varios de los cuales tienen una dirección etaria bien definida. Los programas de educación preescolar y primaria, salud para población abierta y “Oportunidades” son los más progresivos, mientras que el gasto en pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de México (ISSTE), del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y los de salud institucional-formal son altamente regresivos. Al comparar de forma consolidada los impuestos pagados y beneficios/transferencias recibidas del gobierno, se constata un efecto redistributivo neto (progresivo) de la política fiscal.

El estudio que probablemente ha considerado en forma más nítida el corte etario del gasto público es el efectuado para Costa Rica (Trejos, 2005); en él se examinan los cambios en la distribución del gasto fiscal durante los años noventa según quintiles de ingreso, y también desde los puntos de vista geográfico, etario y de género.¹³ El estudio muestra que, entre 1990 y 2002, la “inversión social pública” aumentó en términos reales

¹² El estudio usó como fuente principal a la Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2002, complementada con otras informaciones de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (que incluyen cuentas nacionales, registros del IMSS y de otras reparticiones públicas) y de encuestas de nutrición, salud, de evaluación de Progresá y una encuesta de panel multitemática.

¹³ Se identificó a los beneficiarios de los programas públicos mediante las encuestas de hogares para propósitos múltiples (ENHIG) y la Encuesta Nacional de Inversión Social (ENISO). Luego se asignó la inversión pública social de manera proporcional a la distribución de beneficiarios por programas y fue posible clasificar la inversión por quintil de ingreso, grupo de edad, género y zona geográfica, y calcular el cambio en su distribución entre 1990 y 2002.

y mejoró su equidad distributiva. Los rubros de mayor crecimiento son los rubros dirigidos hacia los jóvenes de 12 a 17 años de edad y hacia los adultos de 50 años y más. En términos per cápita, sin embargo, los más beneficiados con la expansión del gasto son los niños (menores de 12 años) y los adultos mayores, hecho que vino aparejado de mejoras importantes en la cobertura y la progresividad del gasto de educación básica y de la expansión del gasto en pensiones, esta última propulsada por el envejecimiento de la población. No obstante la evolución globalmente favorable, los datos ponen en el tapete una preocupación importante: el gran incremento del gasto en el área de seguridad social (adultos mayores) puede reducir los márgenes de aumento de otros sectores, particularmente el de la educación superior (jóvenes), que experimentó una disminución proporcional en el período, la que podría afectar a la competitividad presente y futura de la economía costarricense.

Estos trabajos constituyen avances importantes hacia una consideración más sistemática e integral de la incidencia distributiva —intra e intergeneracional— de los impuestos y gastos del sector público. Pero como los datos, las definiciones y los métodos varían de un lugar a otro, los resultados no son fácilmente comparables. Es posible dar una mirada más acabada y consistente a estos temas mediante la “contabilidad generacional”, un enfoque analítico específicamente diseñado para este fin.

B. Contabilidad generacional en algunos países de América Latina

Las cuentas generacionales miden el valor presente del pago neto de impuestos al gobierno que hacen las cohortes de la población a lo largo de su vida, y ponen en evidencia si la continuidad de las políticas actuales y anticipadas —que se prevé serán implementadas en un horizonte dado— está financiada de manera inter generacionalmente equitativa, o significan traspasar el costo de dichas políticas y programas a las generaciones futuras. Así, la contabilidad generacional es la otra cara de la moneda del equilibrio fiscal intertemporal, y evalúa la sostenibilidad de las políticas fiscales actuales y su proyección a futuro.

Auerbach y otros (1999) han demostrado los problemas de las medidas convencionales de período o flujo —representadas por los indicadores del déficit fiscal o público— y proponen, en cambio, medidas de equilibrio intertemporal del presupuesto público para evaluar de modo más consistente la posición, sostenibilidad y equidad de la política fiscal.

El enfoque parece especialmente apropiado e interesante para analizar los sistemas y políticas de protección social, dadas las transferencias

intergeneracionales asociadas y los problemas de solvencia (presente y futura) que es necesario considerar, por el envejecimiento demográfico y otras tendencias que afectan el costo de los programas y por sus consecuencias finales sobre los grupos de la población que las políticas intentan proteger.

Diferencias pequeñas en las cuentas generacionales de un país —o pequeñas diferencias entre países en un determinado momento del tiempo— no debieran tener mayor impacto económico, especialmente si se puede lograr un consenso político entre las generaciones actualmente vivas en cuanto a asumir el financiamiento intertemporal de las políticas públicas. Además, si bien el balance generacional es una medida mucho más satisfactoria y comprensiva de la posición fiscal que el déficit o la deuda pública, las estimaciones de este balance son sensibles a varios supuestos del método (Haveman, 1994; Auerbach et al., 1999; Bonnet, 2002), incluidos los referidos a la tasa de descuento para convertir flujos futuros en valores presentes y la consideración de algunos rubros del gasto público como transferencias, consumo del gobierno o inversión (por ejemplo, en partidas relacionadas con la educación y la salud). Pero sí resulta relevante preocuparse y enfrentar las situaciones donde la suma neta del conjunto de impuestos, transferencias y gastos del gobierno (el balance generacional) impone cargas desmedidas para unas cohortes en comparación con otras, o simplemente una elevada carga absoluta para una o más generaciones.

En América Latina, conocemos tres evaluaciones realizadas a la fecha con esta metodología (Argentina, Brasil y México). En el caso de Argentina, Altamiranda (1999) examinó la sostenibilidad de la política fiscal de principios de los años noventa y del plan de estabilización “convertibilidad” implementado durante la primera mitad de la década, incluido el programa de privatizaciones y el sistema de pensiones reformado durante ese período. El autor estima que el programa de privatizaciones —que generó ingresos fiscales por US\$ 18,7 mil millones durante 1990-1994— tuvo un impacto negativo sobre el patrimonio *neto* del Estado de US\$ 9,9 mil millones (equivalente a 3,5% del PIB de 1994), y aumentó el desequilibrio intergeneracional, definido como los mayores impuestos netos que deben pagar las generaciones futuras en comparación con las actuales, entre 2% y 10% respecto de desequilibrios de base entre 70% y 124%.

Se calcula que la forma en que se implementó la reforma a la seguridad social condujo, según los supuestos, a un desequilibrio generacional equivalente a una reducción permanente de las pensiones de entre 33% y 48%. Además, como casi un 60% de los fondos privados de pensiones fue invertido en bonos públicos (*circa* 1995), el efecto sobre el balance intertemporal del gobierno habría sido, desde este punto de vista, un cambio de

composición más que de nivel, ya que si bien se redujo el valor presente de los impuestos netos, aumentó también la deuda pública.¹⁴

En conjunto, la mantención de las políticas de la primera mitad de los años noventa se considera insostenible, pues equivale al traspaso de una carga tributaria neta para las generaciones futuras de entre 75% y 150% mayor que la de las cohortes vivas en 1995; el envejecimiento de la población es un factor que está detrás de los desequilibrios indicados, pero su peso relativo varía según los demás supuestos del modelo. Como comentario general de este trabajo —tanto para las privatizaciones como la reforma a la seguridad social— sería útil complementar el examen de Altamiranda con una evaluación más integral de las alternativas realistas de política que podrían haber logrado mayores grados de sostenibilidad temporal. Un estudio más reciente de Cetrángolo y Jiménez (2003) proporciona una evaluación matizada de las políticas fiscales durante las últimas dos décadas, coincidiendo con el análisis previo, en que el sistema de seguridad social reformado, junto con otros problemas internos y externos, es un componente clave de los desequilibrios asociados a la crisis de 2001-2002.

En el análisis del caso de Brasil (Malvar, 1999), —siguiendo muy de cerca la metodología usada en Argentina y en otros países estudiados en Auerbach y otros (1999)— aparecen cuentas generacionales igual o más desequilibradas que en el caso argentino; la carga tributaria neta de las futuras generaciones se estima (en el escenario base) 116% mayor que la de las vivas hacia la mitad de los años noventa. Este desequilibrio es afectado en buena parte por el proceso de envejecimiento de la población (ese desequilibrio se reduciría a casi la mitad si la estructura demográfica se mantuviera constante) y, en mucho menor medida, por la presencia de deuda pública. Pero, según el análisis de la autora, la mayor parte del desequilibrio se explica por la insolvencia del sistema de seguridad social, en particular por la legislación introducida en la Constitución de 1988, que aumentó el valor de todos los beneficios del sistema e incluso bajó la edad de jubilación de los trabajadores rurales, sin asegurar un financiamiento adecuado a lo largo del tiempo.

Para restaurar el balance intertemporal en el caso brasileño hacia la mitad de los años noventa, hubiesen sido necesarios ajustes tan importantes como un recorte permanente del gasto de gobierno del 26,2%, un aumento del 11,7% en los impuestos (incluyendo las contribuciones a la

¹⁴ Este efecto se da, en diferentes grados, en todos los casos de reforma hacia la capitalización en América Latina y otras regiones, donde una parte de los fondos se invierte en títulos de deuda pública.

seguridad social), o una reducción de las transferencias públicas a los trabajadores en 17,9%. En ausencia de medidas de ajuste, en el estudio se proyecta que los pagos netos de las generaciones futuras seguirán creciendo sustancialmente. La autora resalta la necesidad e importancia de corregir estos desequilibrios, lo que, además, tendría un efecto positivo sobre el ahorro y el crecimiento, toda vez que la propensión al consumo es mayor entre los adultos mayores, hacia los cuales se ha canalizado gran parte de las transferencias netas del gobierno.

El análisis de contabilidad generacional para México, realizado por Sales y Videgaray (2000) concluye que la política fiscal mexicana, tal cual fue evaluada en 1999-2000, no evidenciaba desequilibrios intertemporales.¹⁵ De hecho, se encuentra un balance de 11% a favor de las generaciones futuras, es decir, se prevé que los nacidos con posterioridad al año 2000 enfrentarían, bajo los supuestos del escenario base, una carga tributaria 11% *menor* que las generaciones actuales. El estudio sigue la misma metodología básica ya referida, con algunas diferencias. Primero, es evidente que en México los resultados dependen en gran medida del sector petrolero, que proporciona una parte muy importante de los ingresos fiscales (más de 30%) y, además, afecta de manera significativa el crecimiento económico agregado, por lo que el estudio presta especial atención a su modelación.

Segundo, hay algunos supuestos que parecen menos realistas que los de las evaluaciones de otros países, entre ellos: a) asumir que la evolución demográfica a partir de 2030 será similar a la de los Estados Unidos, lo que se podría subsanar usando las proyecciones disponibles en el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y en la División de Población de las Naciones Unidas (2004), b) se asimila el perfil de pagos de pensiones al de la seguridad social de los Estados Unidos; actualmente ello también es subsanable, ya que la Encuesta de Gasto e Ingresos (ENIGH) de 2002 tiene información suficiente para obtener el perfil requerido y, c) no se incluye en las cuentas el gasto en educación, ya que no se disponía de los datos. No obstante, esto último sesga el resultado en contra del balance generacional, es decir, el balance debería ser aún más positivo que el informado.

En síntesis, en la región de América Latina se verifican distintas situaciones respecto de la equidad generacional del gasto y las transferencias públicas, incluyendo casos de efectos globalmente progresivos (Chile, Costa Rica y México) y casos de escasa efectividad distributiva (Brasil).

¹⁵ Chile es otro país donde existe evidencia de la sostenibilidad intertemporal del presupuesto público, basada en un enfoque e indicadores diferentes a los de la contabilidad generacional (Crispi y Vega, 2003).

También se observan situaciones de importantes desequilibrios intergeneracionales de la política fiscal, afectados por el grado y velocidad del envejecimiento demográfico y por los desequilibrios intertemporales de ciertas políticas relativas a los sistemas de pensiones (Argentina y Brasil, en los años noventa). Se han documentado también otras situaciones que parecen balanceadas y sostenibles en el tiempo (México y Chile, alrededor de 2000). Los estudios revisados sugieren varias implicancias de política, a las que se volverá en la sección final del documento.

C. Transferencias privadas

Las transferencias privadas son importantes en todas las regiones del mundo y es dable suponer — sin mucho riesgo de equivocación — que también lo son en América Latina, debido al papel significativo de los lazos familiares en las redes de apoyo, la falta de cobertura de los programas públicos de protección social y la insuficiencia de sus prestaciones en muchos casos. Los estudios sobre transferencias privadas, sin embargo, son aún más escasos que los que tratan las transferencias públicas, y hay vacíos o discontinuidades de información que impiden, en prácticamente todos los países, su análisis periódico y sistemático. Sin embargo, la información disponible da algunas luces sobre las situaciones que es posible encontrar en los países de la región.

Algunos estudios son de escala reducida y se basan en muestras pequeñas de hogares, como el de Kaufman y Lindauer (1984) en El Salvador.¹⁶ con el propósito de examinar el papel que desempeñan las transferencias monetarias *entre hogares* en la mantención de un gasto familiar “mínimo”. En el estudio se señala que un tercio de los hogares recibía transferencias privadas y que un 11% del ingreso total de los hogares pobres estaba constituido por esas transferencias.¹⁷ Se encontró también que los hogares con jefe mujer tienen una mayor probabilidad (60%) de recibir transferencias que los encabezados por hombres (25%), y que su valor varía de modo inverso con el nivel del ingreso autónomo. Las transferencias parecen estar dirigidas a satisfacer las necesidades básicas y aliviar la pobreza de los hogares receptores, y provienen de hogares donantes con ingresos significativamente mayores a los receptores, dentro del contexto de la “familia

¹⁶ La base de información es una encuesta de 500 hogares en barrios pobres (“informales”) de la ciudad de Santa Ana, levantada en 1976.

¹⁷ Como no se evalúa explícitamente el valor de las transferencias públicas, es probable que se subestime significativamente el valor real del conjunto de las transferencias.

extendida”. Entonces, el efecto progresivo es de un alcance limitado y no sustituye, ni con mucho, la redistribución requerida para paliar la pobreza por parte del sector público.

Los autores plantean que la forma en que se dan las transferencias puede responder a motivaciones altruistas o incluso paternalistas, pero que también pueden ser el resultado de un contrato social basado en la reducción del riesgo de insatisfacción de requerimientos básicos de consumo.

Wong y Espinoza (2005) examinaron los cambios ocurridos en México entre 2001 y el 2003 en cuanto a la probabilidad de realizar transferencias (monetarias y no monetarias) entre las personas mayores de 50 años y sus hijos o no familiares menores de 50 años. Se estudió el número y porcentaje de personas que pasan de ser donantes a receptores de transferencias, o viceversa, y se analizó un conjunto de variables asociadas a esta dinámica. Los resultados muestran que hay una fuerte propensión dentro de la población de 50 años y más a dejar de ser donantes de transferencias a lo largo del tiempo. Una de las variables que explica o influye sobre esta dinámica es la edad, que tiene una correlación positiva con dejar de ser donante y con la probabilidad de recibir transferencias, especialmente financieras. También las viudas y los adultos con mayor número de hijos tienen una mayor propensión a transformarse en receptores. Las personas con mayores ingresos tienen menor propensión a recibir transferencias y mayor probabilidad de convertirse en donantes, mientras que, contra lo esperado, no se encontraron efectos significativos del estado de salud.

Torche y Spielerman (2005) utilizan una encuesta de 4.408 hogares sobre “Relaciones Financieras Intergeneracionales” —realizada en Chile en 2003— para estudiar el grado en que la riqueza de los padres influye en los estándares de vida y la tenencia de activos de los hijos cuando llegan a adultos. La hipótesis es que los padres más ricos transferirán mayores recursos a sus hijos, de tal manera que estos alcanzarán mejores estándares de vida y una mayor tenencia de activos de todo tipo. El análisis parte verificando que la condición económica de los hijos tiene una alta correlación con la de los padres cuando aquellos eran niños o jóvenes; en el análisis multivariado se encuentra que las variables dominantes son el ingreso del mercado laboral y el nivel educacional de los propios hijos. De estos resultados, los investigadores confirman que un canal importante de transmisión del bienestar (o “consumo” actual de los hijos) es la inversión en capital humano (educación), la que afecta positiva y directamente el nivel de ingresos provenientes del mercado laboral. También anotan que el alto estándar de vida logrado por algunos hijos de padres con bajos niveles de riqueza podría explicarse, en parte, por la educación pública y otros programas sociales. Este hecho, si es confirmado de manera más consistente

mediante análisis de datos de nivel individual, permitiría verificar, en un plano intertemporal, las conclusiones de Arenas y Guzmán (2001) respecto de la efectividad distributiva del gasto de gobierno y la política fiscal.

Para la segunda variable dependiente —la tenencia de activos— los resultados son muy distintos. Las variables que representan la situación económica de los padres no resultaron significativas, excepto la riqueza del hogar de los padres. Cuando se controla por las características de los hijos, la riqueza de los padres sigue siendo significativa, aunque a un nivel menor. Se concluye que el canal de transmisión de la riqueza de los padres hacia los hijos se realiza directamente, mediante transferencias directas de activos.

Cox y Jiménez (1996) estudian las transferencias entre padres e hijos en zonas urbanas de Perú y sus variables determinantes, incluidas el nivel de ingreso, de educación y algunas características del hogar. También se discuten si estas transferencias son altruistas o corresponden a contratos implícitos intertemporales de ayuda mutua.

Se encontró, por una parte, que la *probabilidad* de recibir transferencias tiene forma de U según la edad, es decir, varía, en todos los casos, de modo inverso a los ingresos a lo largo del ciclo de vida. Nuevamente se confirma el papel suavizador de los ingresos y del consumo en el tiempo. Por otro lado, el nivel de ingreso antes de las transferencias es la variable más significativa para explicar el valor de las transferencias de padres a hijos, pero la dirección de su efecto cambia de positivo dentro de ingresos hasta 2.900 soles, a negativo en niveles de renta mayores. El *valor* de las transferencias de hijos a padres aumenta con el ingreso hasta rentas que llegan a 3.700 soles.¹⁸

Otros resultados interesantes se refieren a la incidencia de la seguridad social sobre el nivel de transferencias de hijos a padres, cuyo signo resultó negativo, lo que sugiere un grado de sustitución entre transferencias del Estado y las privadas. Se encontró, además, que los estados de enfermedad y de desempleo aumentan la probabilidad de recibir transferencias.

¹⁸ Como explican los autores, este conjunto de hallazgos no es consistente con las motivaciones altruistas, que predicen efectos marginales *negativos* del ingreso del receptor de transferencias sobre el valor de la transferencia recibida. Las evidencias serían más consistentes con la teoría de contratos implícitos intertemporales, según la cual los padres transferirían más recursos a sus hijos en la medida en que estos mejoren sus ingresos, con la expectativa de recibir mayores transferencias durante su vejez. En el caso de las transferencias de hijos a padres, el signo positivo podría explicarse por un aumento en las expectativas de recibir mayores herencias.

D. Efecto de las transferencias sobre la pobreza

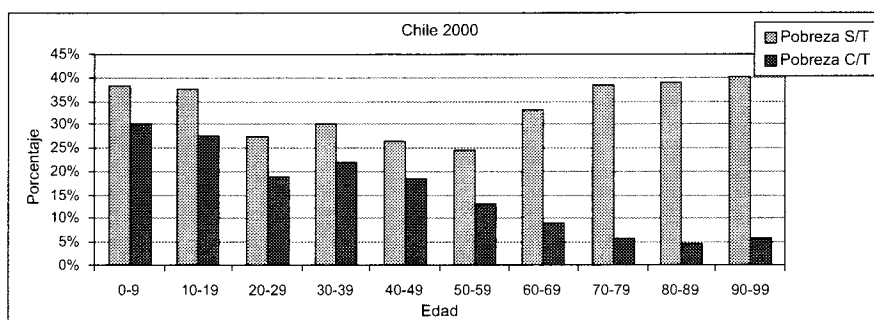
Ya se vio que, en algunos países, las transferencias públicas han jugado un papel globalmente redistributivo (los casos de Chile, Costa Rica y México), pero que esto no siempre es así, por ejemplo, en el caso de Brasil en las últimas dos décadas. Las transferencias privadas parecen cumplir distintas funciones y tienen efectos más complejos dentro de cada país. En una localidad de El Salvador, las transferencias privadas entre hogares juegan un papel “compensatorio” del bajo ingreso, y en México también parecen, en general, favorecer preferentemente a la población de menores ingresos. En Chile y Perú, en cambio, se observan correlaciones positivas de las transferencias privadas entre padres e hijos con los niveles de ingreso o riqueza, lo que implicaría un grado de reproducción intergeneracional del bienestar económico. En todos los casos, las transferencias parecen cumplir un papel significativo: en “suavizar” los niveles de consumo entre los diversos grupos etarios de la población.

¿Qué pueden decir los datos de las encuestas nacionales de hogares sobre el efecto reductor de la pobreza de las transferencias? Cabe mencionar que Uthoff y Ruedi (2002) realizaron un estudio detallado del efecto atenuador de la pobreza en siete países de América Latina en 1996-1997, utilizando la información de las encuestas de hogares sobre transferencias monetarias. El estudio mostró que estas transferencias —principalmente las públicas pero también las privadas— representan entre un 4% y un 22% de los ingresos de la población de esos países, y su efecto reductor de la pobreza varía entre 2,5 y 13,4 puntos. El efecto de las transferencias monetarias es sustancial sólo para las personas inactivas mayores de 65 años, y resultan bastante menos efectivas para disminuir la pobreza de la población desempleada; esto se explicaría porque la seguridad social tiene —pese a sus limitaciones en varios países— una cobertura más amplia y una mayor preponderancia dentro del gasto social de la mayoría de los países de la región, en comparación con la escasa o nula cobertura de los seguros de desempleo. Así, el estudio referido mostró que las transferencias reducen la incidencia de la pobreza de los hogares cuyos jefes de hogar tienen entre 25 y 64 años —situación que responde básicamente al desempleo o a los bajos salarios reales— desde 37% antes de las transferencias a 30% después de ellas, comparando con el efecto sobre el total de los hogares, desde 43% sin transferencias a un 29% después de ellas.

Ahora se presenta una actualización de las estimaciones realizadas por Uthoff y Ruedi con datos de encuestas más recientes de Chile, México y El Salvador, en la que se ha privilegiado la perspectiva etaria/generacional. El peso global de las transferencias —como proporción del total de

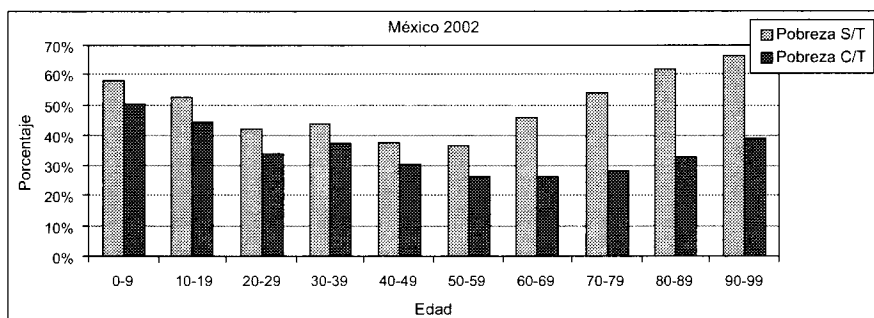
ingresos— es de 14% en Chile, 15% en México y 9% en El Salvador, y que contribuyen a reducir la pobreza en 18, 9 y 3 puntos porcentuales, respectivamente. Estos diferentes grados de efectividad de las transferencias se explican principalmente porque los montos agregados de transferencias de Chile y México (donde representan 15% y 14% del total de ingresos) son mayores que los de El Salvador (donde representan 9% del total de ingresos). La focalización de las transferencias, medida por la proporción de las que se dirigen a hogares pobres antes de recibirlas, es mayor en Chile y El Salvador que en México, por lo que resulta evidente que su menor efectividad en la reducción de la pobreza en El Salvador respecto de Chile y más aún de México, se debe a su reducido valor en proporción a los ingresos. En el gráfico 8 aparecen los perfiles etarios de la población pobre en distintos tramos de edad, y es posible apreciar el distinto grado de efectividad global de las transferencias en los tres países.

Gráfico 8
INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN GRUPOS DE EDAD



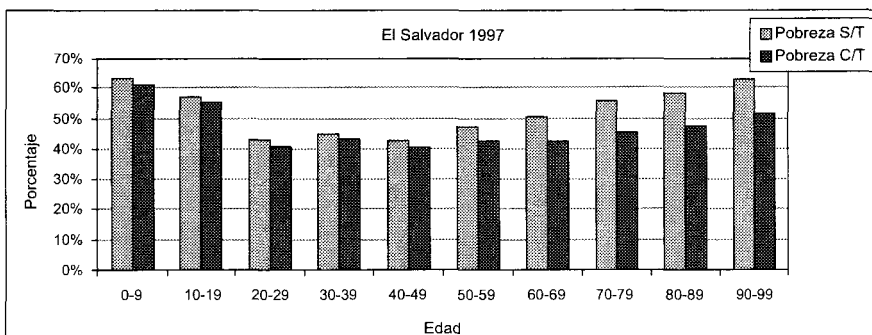
Fuente: CASEN, 2000.

Nota: S/T = sin transferencias, C/T = con transferencias.



Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2002.

Nota: S/T = sin transferencias, C/T = con transferencias.



Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 1997.

Nota: S/T = sin transferencias, C/T = con transferencias.

Interesa observar aquí, el efecto distributivo sobre los diversos grupos etarios de la población; en particular, destacar en los tres países un efecto compensador de la pobreza proporcionalmente mayor en los adultos mayores que en el resto de la población. Especialmente, si se compara con los niños y jóvenes se observa que, de estar sujetos a niveles de pobreza menores al promedio de la población antes de las transferencias, pasan a tener niveles equivalentes o mayores que el promedio después de las transferencias. Recuérdese que esta situación se da de forma más intensa en el caso de Brasil, donde después de las transferencias, la pobreza en los niños termina siendo muy superior a la de las personas mayores.

Así, estos datos sugieren, por una parte, que el efecto distributivo de las transferencias en los países de la región es —en la mayoría de los casos— globalmente progresiva, aunque puede mejorar significativamente; por otro lado, el efecto distributivo entre los distintos grupos generacionales no es necesariamente muy equilibrado, y más bien se observa un fuerte sesgo a favor de las personas mayores, el que puede ser justificado en términos del sistema de protección social. Sin embargo, bajo un prisma de solidaridad intergeneracional y eficiencia productiva, ello no debería llevar a descuidar al resto de la población, especialmente a los niños, que muestran los mayores niveles de pobreza en prácticamente todos los países estudiados. En algunos casos, esto se agrega a un relativo desfinanciamiento de los gastos y las transferencias para la educación secundaria y superior, con lo que podrían frenarse las posibilidades de mejorar la productividad y competitividad de la economía.

E. Observaciones finales

Las tendencias demográficas y la evolución de la estructura del mercado del trabajo en América Latina y el Caribe constituyen dos fuerzas importantes de cambio, que afectan la efectividad de los sistemas de protección social y las posibilidades de financiarlos de manera sostenida en el tiempo y de modo equitativo entre las distintas generaciones que participan y se benefician de ellos. La elevada informalidad del mercado del trabajo y la cobertura insuficiente de los sistemas contributivos de seguridad social son elementos que resulta imposible ignorar.

En este trabajo se intenta explicitar, en primer lugar, algunas restricciones agregadas de recursos para lograr ciertos niveles de protección y la forma en que afectan a los diseños de sistemas y programas. Se muestra cómo países con altos índices de dependencia —producidos en parte por una estructura demográfica desfavorable, en parte por mercados de trabajo con altos índices de subutilización de la fuerza de trabajo— tienen los mayores “requerimientos” por protección social y, al mismo tiempo, las posibilidades más reducidas de satisfacerlas mediante de la “oferta” pública de servicios y transferencias. No siempre las transferencias privadas son capaces de compensar adecuadamente estos déficit y los indicadores sociales se resienten. De allí la importancia de evaluar con atención las distintas realidades nacionales y propender a diseños de política que equilibren la efectividad con la equidad distributiva intra e intergeneracional.

Por otra parte, la revisión de la situación de las transferencias intergeneracionales en distintos países de la región nos llevó a las siguientes observaciones: En primer lugar, estas transferencias son de un monto agregado importante y en prácticamente todos los casos documentados ayudan a suavizar el perfil de consumo a lo largo del ciclo de vida, y tienen un efecto reductor de la pobreza en casi todos los grupos de población. En segundo término, se confirmó la idea adelantada en la primera parte del trabajo de que, incluso en los países donde las transferencias públicas son cuantiosas, las transferencias privadas tienen un peso importante, incluso dominante en algunos contextos. No obstante, las transferencias *públicas* no siempre son fuertemente redistributivas (en ciertos casos, se han evaluado como regresivas) y tienden a favorecer a ciertos grupos generacionales más que a otros; en particular, muestran un efecto reductor de la pobreza mucho mayor entre los adultos mayores que entre los niños, grupo etario que ha mantenido o aumentado su participación relativa en la población pobre de muchos países de la región. El efecto redistributivo de las transferencias *privadas* es más ambiguo, ya que si bien en ciertos casos aparece compensando a los individuos con menor ingreso, en otras situaciones más

bien parecen favorecer a quienes ya son relativamente más favorecidos, por tanto, se está reproduciendo generacionalmente la distribución de la pobreza y la riqueza. Existen pocas evidencias disponibles sobre el papel complementario o sustitutivo de las transferencias privadas (respecto de las públicas).

Tercero, en algunos países, el conjunto de políticas sociales y gasto fiscal que depende de la composición etaria de la población parece estar intertemporalmente desequilibrado, lo que trae importantes consecuencias presupuestarias, e incluso macroeconómicas, en el mediano y largo plazo. Estas situaciones tienen como contrapartida un grado, a veces severo, de inequidad intergeneracional, pues implica traspasar a las generaciones futuras una parte desproporcionadamente alta de la carga tributaria necesaria para financiar el conjunto de políticas y programas a lo largo del tiempo. Así, la mirada sectorial, junto con la estructural y generacional, permite apreciar algunos desequilibrios presupuestarios y distributivos que no aparecen en forma evidente en el análisis demográfico y económico tradicional.

En varios países se ha avanzado significativamente en este tipo de análisis, pero parece claro que en América Latina y el Caribe todavía es posible mejorar significativamente en lo que dice relación con el desarrollo de una base de información sistemática que permita precisar los diagnósticos y opciones orientadas a mejorar la equidad distributiva intra e intergeneracional de las políticas y programas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso, J. C. (2004), "Cuba: de la primera a la segunda transición demográfica. El descenso de la fecundidad", *La fecundidad en América Latina: ¿transición o revolución?* (LC/L.2097-P), serie Seminarios y conferencias, N° 36, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.34.
- Altamiranda, M. (1999), "Argentina's generational accounts: is the convertibility plan's fiscal policy sustainable?", *Generational Accounting Around the World*, A.J. Auerbach, L. Kotlikoff y W. Leibfritz (eds.), Cambridge, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER)/University of Chicago Press.
- Aparicio, R. (2002), "Transición demográfica y vulnerabilidad durante la vejez", *La situación demográfica de México, 2002*, México, D.F., Consejo Nacional de Población (CONAPO).

- Arenas, A. y J. Guzmán (2003), "Política fiscal y protección social en Chile", *Revista de la CEPAL*, N° 81 (LC/G.2216-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre.
- Auerbach, A., L. Kotlikoff y W. Leibfritz (1999), *Generational Accounting Around the World*, Cambridge, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER), University of Chicago Press.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1999), "América Latina frente a la desigualdad", *Progreso económico y social en América Latina, informe 1998-1999*, Washington, D.C.
- BID/CELADE/CEPAL (Banco Interamericano de Desarrollo/Centro Latinoamericano de Demografía/Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1996), *Impacto de las tendencias demográficas sobre los sectores sociales en América Latina*, Santiago de Chile.
- Bloom, D., D. Canning y J. Sevilla (2002), *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*, Santa Monica, California, Rand Corporation.
- Bonnet, C. (2002), "Comptabilité générationnelle appliquée à la France: quelques facteurs d'instabilité des résultats", *Serie Études*, N° 15, París, Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques (DREES).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2004), *Desarrollo productivo en economías abiertas* (LC/G.2234 (SES.30/3)), Santiago de Chile, junio.
- CEPAL/CELADE (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población de la CEPAL) (2004), "América Latina: tablas de mortalidad, 1950-2025", *Boletín demográfico*, N° 74 (LC/G.2257-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/S.04.II.G.94.
- _____ (1996), "Impacto de las tendencias demográficas en los sectores sociales en América Latina: contribución al diseño de políticas y programas" [en línea], Santiago de Chile <http://www.eclac.cl/Celade/SitDem/DE_SitDembid2e.html>.
- Comley, B. y A. Mckissak (2005), "Expenditure growth, fiscal sustainability and pre funding strategies in OECD Countries", documento presentado en la conferencia del Banco de Italia sobre finanzas públicas, Perugia.
- Cox, D., Z. Eser y E. Jiménez (1996), "Motives for private transfers over the life cycle. An analytical framework and evidence from Peru", *Journal of Development Economics*, vol. 55, N° 1, Washington, D.C., Banco Mundial/Elsevier.
- Crispi, J. y A. Vega (2003), *Sostenibilidad y regla fiscal: análisis e indicadores para Chile*, Santiago de Chile, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

- Gokhale, J. y K. Smetters (2004), "Fiscal and generational imbalances: new budget measures for new budget priorities", documento presentado en la conferencia del Banco de Italia sobre finanzas públicas, Roma.
- Haveman, R. (1994), "Should generational accounts replace public budgets and deficits", *Journal of Economics Perspectives*, vol. 8, N° 1, Pittsburgh, Pennsylvania, AEA Publications.
- Kaufman, D. y D. Lindauer (1984), *Income Transfers within Extended Families to Meet Basic Needs: The Evidence from El Salvador*, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Lee, R. (2003), *Demographic Change, Welfare, and Intergenerational Transfers: A Global Overview*, Berkeley, University of California.
- Lee, R. y A. Mason (2005), "Population aging and intergenerational transfers. Introducing age into national accounts", documento de trabajo presentado en la vigésima quinta conferencia de la Unión Internacional para el Estudio de la Población (UIECP), Tours, 18 al 23 de julio.
- Malvar, R. V. (1999), "Generational accounting in Brazil", A. Auerbach, L. Kotlikoff y W. Leibfritz (eds.), *Generational Accounting Around the World*, Cambridge, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER), University of Chicago Press.
- SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) (2004), "Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas: resultados para el año de 2002" [en línea], México, D.F. < http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/shcp/informacion/documentos/comunicado_art_29_lif_2005_art_31_sat.pdf>.
- OIT/PREALC (Organización Internacional del Trabajo/Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe) (1991), *Empleo y equidad: el desafío de los 90*, Santiago de Chile.
- Paes de Barro, R. y M. Carvalho (2003), "Desafíos para a política social brasileira", *Texto para discussão*, N° 985, Rio de Janeiro, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).
- Palacios Escobar, A. (2002), "La dinámica demográfica, reto de las regiones pobres", *Superación de la pobreza y universalización de la política social*, México, D.F., Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México (CEDEM), Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Saavedra, J. y M. Valdivia (2003), "Estructura del ahorro y del hogar durante el ciclo de vida: evidencia para las cohortes peruanas", *Documento de trabajo*, N° 4, Lima, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
- Séller, P. y D. Hauner (2005), "Characterizing the expenditure uncertainty of the industrial countries in the 21st century", documento presentado en la conferencia del Banco de Italia sobre finanzas públicas, Perugia.

- Torche, F. y S. Spilerman (2005), "Parental wealth effects on living standards and asset holding: results from Chile", *International Perspectives on Households Wealth*, Edward Wolff (ed.), Cheltenham, Edward Elgar.
- Trejos, J. D. (2005), "Evolución de la equidad de la inversión social pública desde los años noventa", *Décimo informe sobre el estado de la nación en desarrollo humano sostenible. Informe final*, San José, Estado de la Nación.
- UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2002), "Macroeconomics, poverty, population and development" [en línea], Nueva York, <<http://www.unfpa.org/swp/2002/english/ch3/index.htm>>.
- Uthoff, A. y N. Ruedi (2005), "Diferencias en la efectividad de la política social para atenuar la incidencia de la pobreza: un análisis a partir de las encuestas de hogares", documento presentado en la reunión de expertos Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 28 y 29 de junio.
- Uthoff, A., C. Vera y N. Ruedi (2006), "Relación de dependencia del trabajo formal y brechas de protección social", *Serie Financiamiento del desarrollo* N° 169 (LC/L.2497-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), febrero.
- Wong, R. y M. Espinoza (2005), "Dynamics of intergenerational assistance in middle and old-age in Mexico", documento presentado en la conferencia de la Asociación Demográfica de los Estados Unidos de América, Pennsylvania, abril.